

tas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Lo decretó y firmó el C. Juez. Doy fé.
—*Conrado Diaz Solo.*—*Donaciano Monroy*, Secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 27 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por D. Luciano P. Hernandez, contra la providencia del Gefe político de Guadalcázar que sin forma alguna de juicio lo desterró de los límites del Municipio de Arista como sedicioso, perturbador y pernicioso; cuya providencia viola en concepto del quejoso las garantías consignadas en los artículos 16, 20 y 21 de la Constitución federal. Visto el fallo del Juez de Distrito, con todo lo de más que se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos y legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de San Luis Potosí en 10 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Luciano P. Hernandez, contra la providencia que ha dado origen al presente recurso.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Tóca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José M. Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre ... de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el C. Encarnacion Serrano, contra el Ayuntamiento de Irapuato, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: varios vecinos de Irapuato, diciéndose propietarios de fincas urbanas, promovieron el presente recurso de amparo, contra el Presidente del Ayuntamiento de la misma Villa, que publicó un acuerdo de dicho Ayuntamiento, en el que se previene, que los dueños ó encargados de fincas urbanas, dentro del término de seis meses, quiten las canales que desagüen para la calle, embutiendo en las paredes cañerías que den salida á la agua por debajo de las banquetas, y que los que terminado el plazo fijado, no hubieren cumplido con esta disposicion, sufrirán una multa de uno á cincuenta pesos, quedando siempre obligados á cumplirla.

Este acuerdo del Ayuntamiento de Irapuato, á juicio de los promoventes, viola en sus personas las garantías individuales consignadas en los artículos 5, 16 y 27 de la Constitución federal, y considerando urgente la suspension del acto reclamado solicitaron, que el Juzgado hiciera uso de la facultad concedida en los artículos 3, 5 y 6 de la ley de 20 de Enero de 1869; pero en auto de 20 de Abril último se declaró: que no era de mandarse suspender al acto reclamado, por no haber empezado su ejecucion, y porque no habia datos bastantes para reputarlo comprendido en el artículo 101 del Pacto federal.

En el escrito de queja, y en el alegato presentado por el apoderado de los promoventes, se exponen las razones en que se pretende fundar la violacion de los artículos constitucionales que se han citado, y que son en extracto los siguientes: La violacion del

artículo 5º, se hace consistir, en que para la obra que es necesario emprender, para cumplimentar el acuerdo del Ayuntamiento, no se ha consultado la voluntad de los propietarios, ni se ha dado por ella una justa retribucion; la del artículo 16, en que el Ayuntamiento de Irapuato, no tiene facultades para dar una ley, imponiendo una contribucion que no está comprendida en el presupuesto municipal, aprobado por el Congreso del Estado, y que se opone al artículo 141 de la ley número 35 del primer Congreso constitucional, y por último, que se opone al principio reconocido en el artículo 27 del Pacto federal, porque modifica la propiedad, cambiando el aspecto de las casas, y porque como dicen los promoventes, "los propietarios son *despojados de las canales*, y del dinero que gasten en embutir las cañerías en la pared."

El Promotor del Ayuntamiento de Irapuato en un informe con justificación, sostiene: que el Ayuntamiento tuvo facultad para decretar la medida que ha originado este juicio, porque así está determinado en el reglamento que se titula "De la comodidad y ornato público de que los Ayuntamientos deben cuidar en sus municipios" en los artículos 12, 74 y 75, y que dicha medida que fué dictada por todos los concejales que estuvieron presentes en la sesion en que se trató de este asunto, y no por la mitad, como aseguran los quejosos que fué aprobado por el Gobierno del Estado y concluye pidiendo, se aplique á los promoventes la multa que impone el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869.

El Promotor fiscal, ha examinado las razones que se han extractado en el acuerdo del Ayuntamiento de Irapuato, y á su juicio no hay oposicion entre este último y los artículos que se han invocado en el presente juicio.

La garantía individual reconocida en el artículo 5º de la Constitución federal, consiste en que ninguna autoridad pueda exigir de un habitante de la República algun

trabajo personal, sin su consentimiento, y sin la justa retribucion; este principio de derecho natural, no es opuesto al acuerdo del Ayuntamiento de Irapuato pues en él no se obliga á los propietarios ó encargados de fincas urbanas á algun trabajo personal, si entienden los promoventes que debe entenderse por trabajo personal la intervencion que debe haber de parto de ellas para que se quiten las canales de sus casas, no habria disposición legislativa por legítima que fuera, que no fuera opuesta á la Constitución.

El pago de los impuestos sería anticonstitucional, porque implica un acto del causante, que segun los promoventes sería un trabajo personal.

Respecto de la violacion del artículo 16 que tambien se cita en el escrito de queja, la fundan los quejosos, en la falta de competencia en el Ayuntamiento de Irapuato para dictar la disposicion de que se trata, porque á su juicio es una ley en la que se establece una contribucion, que no está comprendida en el presupuesto municipal, aprobado por el Congreso del Estado y por que se opone al artículo 141 de la ley número 35 del primer Congreso constitucional.

Las corporaciones municipales, por la misma naturaleza de su institucion, tienen facultades de dictar las providencias necesarias para llenar su objeto, y de sancionar estas providencias con penas que no sean de la exclusiva competencia del poder judicial. El acuerdo del Ayuntamiento de Irapuato, es una disposicion de esta clase supuesto que tiene por objeto procurar la conservacion del piso de las calles, la comodidad de su tránsito y el ornato de la poblacion.

En el Estado existe un reglamento que en general concede estas facultades á los Ayuntamientos, en los artículos citados por el Presidente del Ayuntamiento de Irapuato, y que acompañó en copia á su informe con justificación.

Ademas, el artículo 141 citado en el es-

erito de queja, no dice que necesariamente las fincas urbanas deben tener canales sino que los Ayuntamientos, en la época en que fué dada aquella ley, cuidaran de que las canales no desagüen sobre las banquetas. La razon de esta disposicion fué la conservacion de las banquetas, y el Ayuntamiento de Irapuato ahora, fundado en la misma razon, es decir, cuidando de que no solo las banquetas, sino el piso de la calle se conserve en buen estado, ha mandado que el desagüe de las fincas urbanas se hiciera por cañerías embutidas en la pared, que dieran salida á la agua por debajo de las banquetas.

El dinero que los dueños de dichas fincas tienen que emplear para cumplir con esta disposicion, no es una contribucion, porque no entra al fondo municipal, ni se invierte ni distribuye por el mismo Ayuntamiento en sus gastos administrativos. Muchas disposiciones de asco, salubridad y conservacion, traen consigo algun gasto para los habitantes de un municipio; pero no son propiamente contribuciones, si no proceden de la misma naturaleza de dichas disposiciones.

Se deduce de lo expuesto, que el Ayuntamiento de Irapuato, no dió una ley creando un impuesto fuera de su presupuesto, sino obrando dentro del círculo de sus atribuciones acordó una disposicion que tiene por objeto la conservacion, comodidad y ornato de las calles de las poblaciones, las cuales están encomendadas á su cuidado segun las leyes particulares de policia, y que el Gefe político, á la vez Presidente de dicha corporacion, sancionó con una pena que segun el artículo 21 de la Constitucion cabe en sus facultades, y en consecuencia no puede decirse violado el artículo 16 de nuestra Constitucion federal.

El artículo 27 de la misma Constitucion, eleva á precepto constitucional, el principio de que la propiedad particular no puede ser ocupada sine por causa de utilidad pública y previa indemnizacion, el cual no se contraría con el acuerdo que ha motivado el

presento recurso, pues el Ayuntamiento no ha despojado de sus fincas, ni de parte de ellas, á los quejosos, supuesto que no tienen propiedad en el espacio que ocupan las canales. Pero en el alegato presentado por el apoderado que siguió el juicio, se hace consistir este despojo, en que se les quitan á los propietarios las canales, y se les despoja del dinero que tienen que gastar en dar cumplimiento á la disposicion de que se trata.

No se comprende que deba entenderse por el despojo de canales, pues si entienden los promoventes la parte de la finca á la que se dá este nombre, el Ayuntamiento los deja á los propietarios, y si es el derecho de dar salida á las aguas pluviales por este medio, esto vendría á ser una servidumbre que no tienen los propietarios de fincas urbanas. Lo mismo debe decirse del dinero de que se dicen despojados los quejosos.

El Ayuntamiento no percibe el dinero que se emplea en dar cumplimiento á la disposicion de que tantas veces se ha hecho mencion, y como antes se ha probado, este gasto no es mas que el resultado de un acuerdo para el cual tuvo facultades el Ayuntamiento.

Algunos de los que promovieron el presente juicio, han pedido al Juzgado, los tenga por desistidos, por cuya causa y supuesto que no aparece violacion de alguna garantía constitucional, el Promotor fiscal pide.

Primero: que el Juzgado dé por desistidos á los que así lo han solicitado durante la secuela de estas actuaciones.

Segundo: que se sirva el Juzgado declarar: que no ha lugar al amparo de la Justicia de la Union. por no haberse violado ninguna garantía individual.

Guanajuato, 14 de Julio de 1874.—
José Aguilar y Córdova.